

Participación ciudadana por Internet en México

Roberto Ruz Sahrur

Consejero Electoral

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán

roberto.ruz@iepac.mx

De las 27 entidades mexicanas que cuentan con una ley que regule y haga vinculantes los mecanismos de participación ciudadana, tan solo 6 mencionan la palabra “Internet”, “redes sociales” y/o “plataformas en línea” entre sus artículos. Es decir, menos del 20% de los congresos locales se ha atrevido a reconocer la existencia de una tecnología inventada hace 40 años para facilitar la incidencia pública de la ciudadanía.

De las seis entidades que sí lo hacen, la mayoría “aprovecha” el Internet con fines meramente de difusión informativa y de consulta, en lugar de invitar a la ciudadanía a proponer y colaborar en la toma de decisiones públicas. La Ciudad de México es la más avanzada en participación digital, pero aún dista mucho de consolidar una e-democracia participativa.

La presente exposición planea presentar un panorama de la participación ciudadana vinculante por Internet en México, incluyendo obstáculos como la brecha digital nacional, los bajos índices de involucramiento de la ciudadanía en los pocos esfuerzos registrados, el desinterés histórico de las y los actores políticos por promoverla; y una propuesta estratégica para el aumento sostenido de la e-participación, clave para el fortalecimiento de las instituciones electorales a través de la democracia participativa.

Introducción

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la pasada Consulta Popular (1 de agosto de 2021) participó el 7% de la lista nominal en todo el país. Una cifra relativamente baja si se compara con el 40% que se requería para hacerla vinculante. No contó con participación a través de Internet.

En la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el número de participación fue muy similar, ya que únicamente salió a emitir su opinión el 5% del listado nominal.

En Quintana Roo, el 2 de noviembre del 2020, se realizó una Consulta de Participación para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al diseño y configuración del Parque de la Equidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU- Habitat), institución encargada de la coordinación, informó que en la primera jornada de la consulta hubo únicamente 2,260 participaciones; de las cuales, alrededor de un 10% fueron vía internet.

Similarmente, *Decide Mérida* contó con 3030 participantes en línea para, entre otros, modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida a través de este ejercicio de gobierno abierto.

Entre las entidades se presentan ejemplos de baja participación ciudadana digital, o e-participación, en México, contrastando con las tendencias de involucramiento en plataformas digitales y el crecimiento del uso del internet.

¿Qué es lo que está ocasionando que la ciudadanía mexicana aún no se acostumbre a intervenir digitalmente en mecanismos de participación en línea?

Brecha digital en México

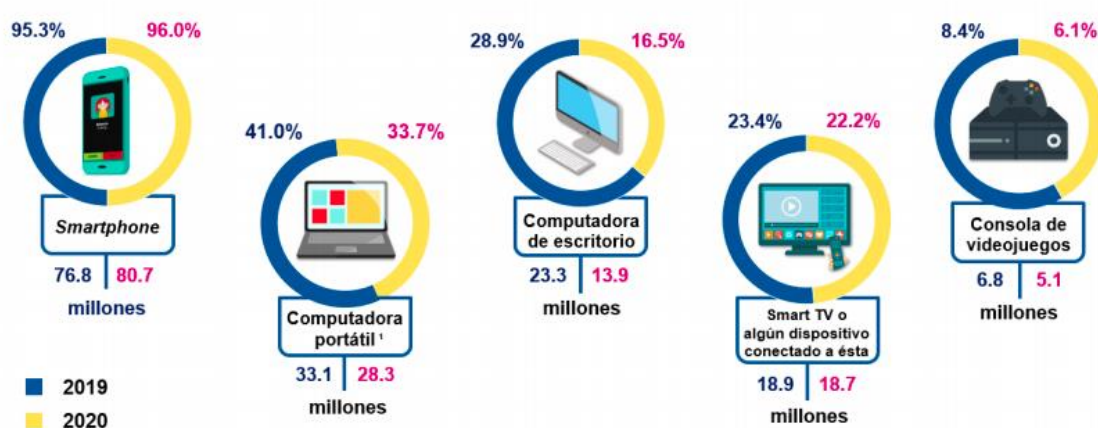
A la hora de analizar la posibilidad de realizar mecanismos de participación ciudadana por Internet, uno de los principales obstáculos para realizarlos es la llamada “brecha digital”, entendiéndola como el proceso de cómo las tecnologías producen diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y establecen distancia entre aquellas (Camacho, 2005, p. 61-71.).

Se ha registrado un avance en la penetración de internet en México en los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). No obstante, la proporción respecto a otras naciones es menor. Mientras que en Corea del Sur, Reino Unido, Suecia y Japón

nueve de cada diez personas son usuarias de internet; en México la proporción aún es de siete de cada diez.

Hay 84.1 millones de usuarios de internet mayores a 6 años, de los 126 millones de habitantes que hay en el territorio nacional, lo que equivale al 66.7% de la población total, según estima la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2020).

Usuarios de Internet según equipo de conexión (2019 y 2020)



Nota: Los usuarios pueden usar más de un dispositivo.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.

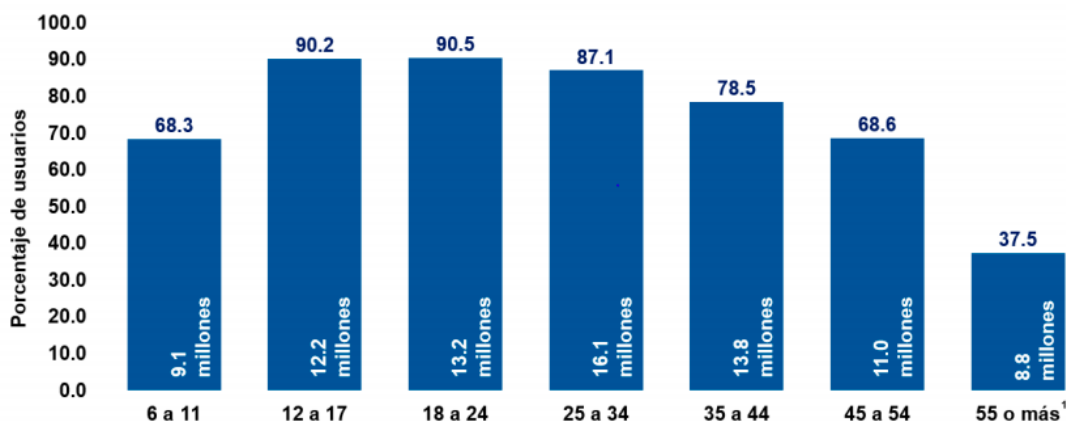
Si bien ha habido avances tangibles en los últimos años como muestran las estadísticas, sobre todo en la cobertura y conexión a internet a través de celulares, aún hay mucho camino por recorrer para lograr una igualdad real en el país (Alemán, 2019, p. 22-23).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tomado relevancia y se han convertido en elementos de discriminación y exclusión en determinados contextos sociales, como la pobreza, la marginación y el rezago educativo (Cabero, 2017).

La brecha digital también afecta a las personas mayores que suelen tener dificultades técnicas o de conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías y al internet. En México, según el INEGI, más

de un tercio de la población, el 37.4%, rebasan los 55 años y suelen tener mayores impedimentos para conectarse. Son las y los jóvenes entre 12 y 34 los que están más familiarizados con el uso de internet.

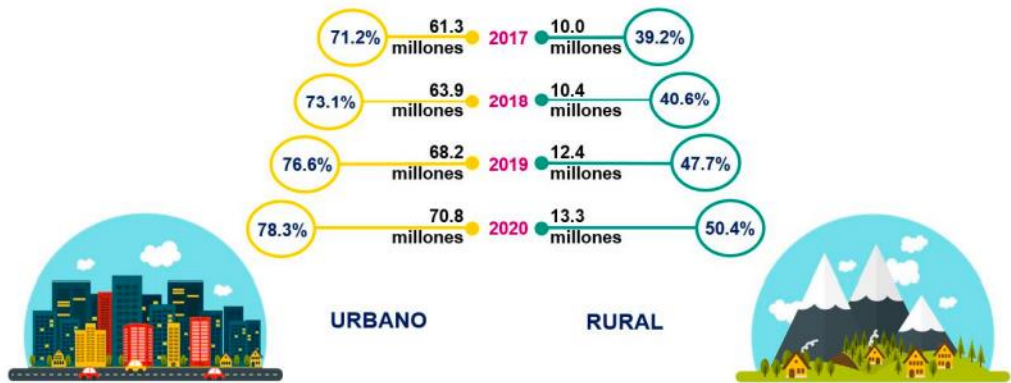
Distribución de los usuarios de internet por grupos de edad, 2020



Nota: Porcentajes calculados respecto de la población total por grupos de edad.
Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.

También es importante considerar la desigualdad de la distribución en el ámbito urbano y rural, pues 70.8 millones de usuarios de internet son de zonas metropolitanas, en comparación con los 13.3 millones de cibernautas que pertenecen a comunidades lejanas a las urbes (INEGI, 2020).

Distribución de usuarios de internet en ámbito urbano y rural, 2017-2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020.

El costo del servicio, los bajos niveles de escolaridad, la falta de habilidades digitales y la edad se relacionan con la no conectividad y la no utilización de internet en áreas rurales (Martínez, 2020: p.10-19).

Reducir la brecha digital

Estudios argumentan que las soluciones para reducir la brecha digital son variadas, y básicamente se dividen en dos grandes bloques: el primer bloque plantea la resolución del problema radica principalmente en infraestructura de tecnologías de telecomunicaciones e informáticas, mientras que el segundo considera que el problema es consecuencia de la desigualdad social y económica (Alcides, 2017: 59-71).

Las causales más comunes de la brecha digital son: 1) La tecnología disponible, es decir la infraestructura en servicios y la apropiación de la tecnología como resultado de la disponibilidad de recursos financieros; 2) la apropiación social de la TIC como resultado de su utilidad o valor social; 3) la capacidad de las personas para beneficiarse de la TIC, habilidades y aptitudes desarrolladas por los procesos educativos formales e informales; 4) las condiciones de desarrollo económico de las comunidades; 5) la distribución geográfica de las comunidades; y 6) las características demográficas de la población (Alcides, 2017: 59-71).

Una investigación muestra que el costo del servicio es la principal limitante para la conectividad a internet en los hogares rurales. Además, los individuos de mayor edad tienen más probabilidades de no acceder y no usar el ciberespacio por la falta de habilidades digitales, lo cual se encuentra relacionado con la educación. (Martínez Domínguez, 2020, p. 20).

La brecha digital, ¿un sesgo a la e-participación ciudadana en México?

Uno de los principales retos de la participación digital en la construcción de una e-democracia recae en los sesgos de sus resultados. El sesgo, entendido como “un error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras” (RAE, 2021), pudiera conferir a los resultados de un mecanismo participativo un

peso desproporcionado a favor o en contra de forma injusta. Sin embargo, de existir una participación sesgada, pudiera no existir un nexo causal en el uso del internet propiamente; sino en la ineficiencia del Estado al no poder reducir, y muchos menos erradicar, la brecha digital.

El acceso y uso del internet es un derecho humano, de cuarta generación, y en el caso de México un derecho constitucional. Entonces, promover la participación ciudadana a través del Internet de manera vinculante, ¿podría considerarse un error habiendo analizado la brecha digital entre zonas urbanas y rurales; y entre jóvenes y adultos mayores? ¿O, por el contrario, pudiera precisamente representar una medida afirmativa para combatir dicha brecha?

El uso de tecnologías genera un cambio social en la dinámica de la participación porque altera el proceso colectivo de discusión y evaluación de las alternativas (Garza, 2020: 20). Estos cambios sociales pueden producirse ante la evidencia de problemáticas poco atendidas que se reflejan en los resultados de los mecanismos. En efecto, los procesos de participación ciudadana en el mundo son una herramienta base para visualizar sesgos entre grupos de la ciudadanía, lo que permite el estudio de fenómenos sociales y desatan una puesta en acción.

Por ejemplo, cuando las estadísticas delatan una menor participación de las mujeres, el Estado no se plantea excluir a este sector, sino que atiende con políticas públicas. Esta premisa de actuación es una analogía del deber del Estado respecto a la brecha digital y los sesgos que provocaría; es decir, no debe buscarse la exclusión de la digitalización, sino la inclusión de los grupos que no tienen acceso al internet como un derecho en los procesos de participación. O que, de tenerlo, no están motivados a e-participar e involucrarse en las decisiones públicas que les afectan.

A montarse sobre estructuras sociales y políticas predefinidas, la participación digital contiene vicios inherentes como cualquier otro medio por el cual ejercer mecanismos democráticos. Por ejemplo, sin caer en una falacia de generalización apresurada, la digitalización pudiera darles mayor fuerza a sectores urbanizados o a los niveles socioeconómicos con mayor penetración de internet. Sin embargo, teóricamente la tecnología promete democratizar la participación y empoderar a cualquier ciudadano a largo plazo (Cantú, 2019: 22). A lo que debemos agregar que diversos tipos de expresión democrática pueden coexistir mientras el Estado trabaja en la

construcción de ecosistemas de competencia para el control de las brechas, impulsando una evolución de la democracia mientras se atienden problemáticas coyunturales.

“La realidad es que es evidente que la adopción digital tiene un efecto directo sobre la deliberación pública, la cantidad y calidad de participaciones de los ciudadanos y por tanto en la cultura cívica. En la literatura sobre adopción tecnológica en gobierno observamos que los beneficios de esta son tan evidentes y que sería un error no pensar en maneras de hacer más eficiente el accionar gubernamental. Sin embargo, la reflexión que nos debe provocar es más bien considerar los cambios sutiles pero relevantes en la manera en la que los ciudadanos interactúan con su gobierno local y navegan su vida pública.” (Garza, 2020: 78).

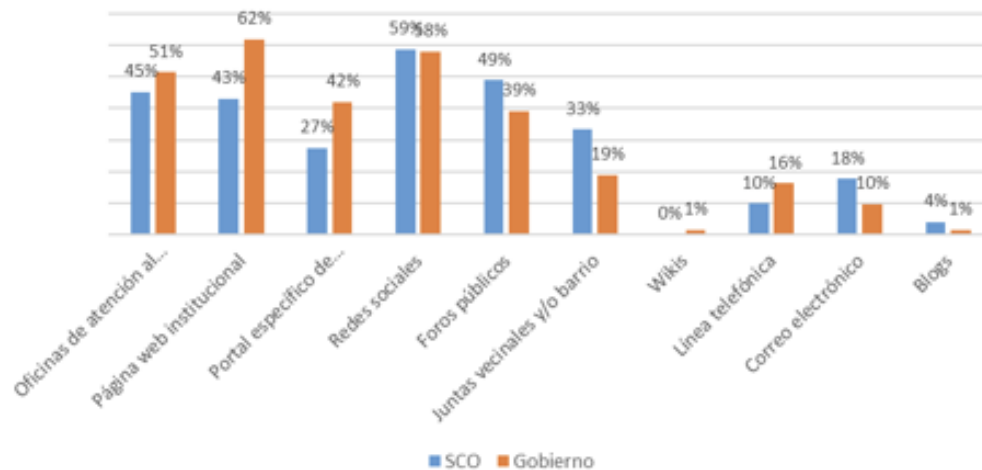
Las realidades sociales se transfieren a los ejercicios de participación: cualquier brecha presente en la población se refleja en probables sesgos dentro de la participación digital y no necesariamente a la inversa. En los primeros ejercicios de participación ciudadana por internet es probable que la participación disminuya en ciertos sectores como sucedió en “*Decide San Pedro 2019*”, una iniciativa que ya llevaba más de 15 años de implementación en el estado de Nuevo León pero que en 2019 se digitalizó. Anteriormente se le conocía como “Presupuesto Participativo de San Pedro Garza García” y, aunque era ampliamente conocido y aceptado por la sociedad, al momento de digitalizarse los adultos mayores tuvieron una menor participación. Lo que evidencia un tipo de sesgo generacional temporal toda vez que el internet y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, según Erika González García, requieren de un proceso de aprendizaje en los grupos etarios mayores.

Si queremos calificar la aplicación de la digitalización habría que compararla con otras herramientas de participación ciudadana más allá de identificar si existe un reflejo de las problemáticas sociales en ésta; porque en efecto, así será.

Para ello, Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez propone diez espacios de participación, donde la mayoría son digitales y/o en línea. Es interesante subrayar que Ruvalcaba genera una comparativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobierno, usando las mismas plataformas de participación. La gráfica muestra los resultados del cuestionario a modo de estadísticos

descriptivos que permiten visualizar los resultados generales del estudio para comprender la percepción de la percepción de la ciudadanía, de funcionarios públicos y miembros de organizaciones civiles:

Herramientas más eficaces en la participación ciudadana



Fuente: “Participación Ciudadana y Gobierno Abierto: comparando percepciones entre Sociedad Civil Organizada y Gobierno en el Estado de Jalisco, México.” e-ISSN: 2683-1643 Revista Buen Gobierno No. 27. Julio– diciembre 2019. Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México.

Analizar dicha gráfica nos permite comprender que, calificado por los propios usuarios, la digitalización de la participación pública puede ser tan eficiente o deficiente como este diseñado el mecanismo de participación a priori. El Internet no es la causa en sí de las brechas, mucho menos de los sesgos; y la participación ciudadana en procesos presenciales no es un sinónimo de éxito.

Brown y Garson plantean que el *determinismo tecnológico*, concepto que le confiere a la tecnología una especie de fuerza que avanza sin detenerse, va redefiniendo nuestro mundo y a sus gobiernos de maneras distintas, paralelo y vinculado a la evolución de las democracias. “Justamente, son las nuevas prácticas que se ejercen a través de las plataformas digitales las que conllevan establecer también sus nuevas características” (Ford, 2019: 35).

En el entendido de lo anterior, que existan sesgos de participación al digitalizar mecanismos es un foco rojo para el Estado. No para concluir que estos sesgos son consecuencia propia de la digitalización, sino para comprender que las realidades sociales se transfieren a los ejercicios de participación y que, si el propósito es avanzar hacia una democracia digital, la ciudadanía tiene que contar con las herramientas necesarias para participar digitalmente.

Una modalidad híbrida, una posible solución

El 15 de marzo del 2019, la Ciudad de México inauguró su nueva Ley de Participación Ciudadana con un novedoso ejercicio participativo que involucra a la ciudadanía con o sin acceso a internet.

La llamada Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 tenía como objetivo recolectar la opinión de las y los vecinos de todas las alcaldías, es decir, preguntaron cómo y de qué manera querían que se ejecute el gasto público.

Para esta actividad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso a disposición de la ciudadanía dos modalidades de votación: de manera electrónica y por la vía tradicional.

La modalidad electrónica se realizó únicamente en las colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se instalaron 239 Mesas Receptoras de Votación y Opinión, las cuales fueron equipadas con tabletas que traían instalado el Sistema Electrónico por Internet (SEI) propiedad del IEMC.

En las alcaldías restantes, la modalidad de votación y opinión fue la tradicional, esto es, a través de boletas de papel que las y los ciudadanos depositaron en urnas.

Este ejercicio experimental abrió la puerta para que la gente participe aún no teniendo una computadora o acceso a internet. Es más, tampoco requerían habilidades digitales para hacerlo, pues podían acudir a las urnas con la única diferencia de que su voto no sería en una papeleta, sino en un dispositivo electrónico (tableta conectada a internet).

Esta opción híbrida genera una nueva posibilidad para llevar a cabo consultas por internet en lugares en donde hay poca o nula conectividad, o bien, con personas que tienen escasas habilidades digitales.

La e-participación en entornos conectados

Podemos argumentar que la participación ciudadana se favorece toda vez que permite a la población con acceso a internet y conocimientos tecnológicos básicos involucrarse desde cualquier ubicación, y en un rango de tiempo más amplio.

Sin embargo, en este sentido es importante recordar que la democracia no es un fenómeno estático y universal; su carácter específico varía en función de diversas variables circunstanciales. Su vitalidad, funcionalidad y supervivencia no pueden darse por sentadas. Se trata de un proyecto histórico, atravesado por las disputas entre aquellas fuerzas que, de distintas maneras, lo restringen y aquellas que tratan de ampliarlo, sobre todo fortaleciendo la participación (Dahlgren, 2012).

La digitalización de la participación ciudadana es una prueba del carácter evolutivo de la democracia, por lo que cada vez que la historia transforma a una, los cambios se reflejan en la otra.

Desde esta premisa es importante aclarar que no es lo mismo poner en práctica la digitalización de un mecanismo completamente nuevo, como lo que pasó con “Decidim la Barcelona que Volem” tras iniciar la crisis del COVID-19, que digitalizar un mecanismo de participación que ya era puesto en práctica de manera presencial con cierto éxito, como “Decide San Pedro 2019”, dado que en el segundo caso ya existía la costumbre de emitir opinión y, entonces, los resultados se ven vinculados a factores a priori.

La vinculación entre el mundo online y offline es fundamental en los procesos de digitalización de la participación ciudadana, toda vez que funcionan eficientemente al ser complementarios. Deben trabajarse juntos al menos en una etapa de transición. Esto permite que la población reacia a

participar desde lo digital no sea el factor de descenso en las estadísticas de participación (Ford, 2019: 35).

Por otro lado, autores afirman que el factor causal del aumento o disminución de la participación en un mecanismo es, de hecho, la construcción propia del mecanismo en su forma intrínseca.

La construcción del mecanismo de participación

Muchos autores han interpretado a las reformas electorales como los principales obstáculos a los mecanismos a través de los cuales se obstaculizó el proceso democratizador en México (Ayala, 2017: 20-22), que se obtiene de realizar un análisis del entramado legal que les da sustento a las instituciones electorales, al explorar la investigación de distintos temas dentro de la coyuntura política mexicana actual. Ejemplos de lo anterior son las propuestas de reforma electoral alternativas al oficialismo, la representación de las minorías, la dinámica legislativa y el papel de la oposición política en esta, entre otros.

En los últimos treinta años, México ha avanzado en la consolidación de un marco institucional particularmente centrado en el ámbito político electoral. Sin embargo, la realidad mexicana confirma que ese proceso resulta insuficiente sin un adecuado tratamiento de los problemas sociales, porque la participación de la ciudadanía en diferentes ámbitos de la vida pública es prácticamente nula (Vieska, 2013: 105-127).

Tal y como lo estableció un estudio comparado que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (2016), cuyo objetivo fue analizar la regulación local de los mecanismos de participación ciudadana e identificar las causas jurídicas que paralizan el ejercicio de estos derechos, se visibiliza una regulación desigual para el ejercicio de estos derechos, con porcentajes, plazos y materias muy diversos y, en muchos casos, criterios que en lugar de hacer posible el ejercicio de estos derechos, se conviertan en verdaderas limitantes de los mecanismos de participación ciudadana.

Creación de leyes de participación ciudadana sin participación ciudadana

En la construcción de reformas de los marcos normativos estatales de los últimos diez años no se realiza el involucramiento de la ciudadanía, ni siquiera en las que regulan participación ciudadana. Más aun que el contexto de los procesos de restructuración del orden capitalista está surgiendo, actual y mundialmente, un nuevo tipo de ciudadanía: la llamada ciudadanía digital (Alva, 2020: 81-105). Pues, como lo señala Gómez Choreño citado por Alva de la Selva (2020), se trata, en realidad, de diversos conjuntos de personas que, además de asumir en lo individual una ciudadanía digital participativa, conforman cuerpos sociales materiales con todo tipo de intereses ético-políticos declarados, tanto locales como globales.

Mantener las formas convencionales de participación no logra entusiasmar a las y los ciudadanos en el proceso de consolidación de la democracia. Avanzar en conjunto con la realidad no significa nada más establecer el uso de las redes sociales como medios de información, sino que se deben incluir como un factor de socialización democrática efectiva. Está demostrado: no importa quién las use, o cuáles, el mero uso de las redes sociales aumenta la probabilidad de la ciudadanía de apoyar más a la democracia que el promedio (Informe Latino barómetro, 2018: 29).

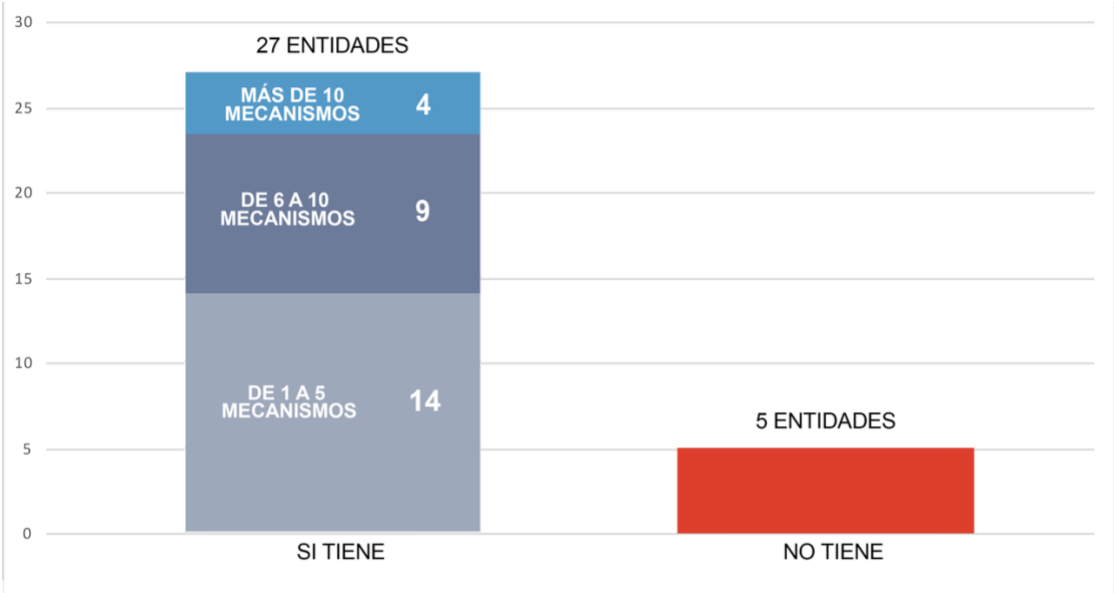
En síntesis, si se busca promover una participación ciudadana por internet, tendríamos que mejorar las leyes que respaldan y hacen vinculantes estos mecanismos de origen.

Democracia participativa digital

Quienes se oponen a la democracia participativa digital usan el argumento de que la ciudadanía participa en muy bajos porcentajes a través de internet. Sin embargo, la e-participación será tan deseable como los mecanismos que se estén utilizando para promoverla (McLavery, 2017: 185-197). Es decir, el nivel de involucramiento de la ciudadanía está directamente relacionado a las leyes de origen que constituyen estos mecanismos como las plataformas donde se ejerce la participación.

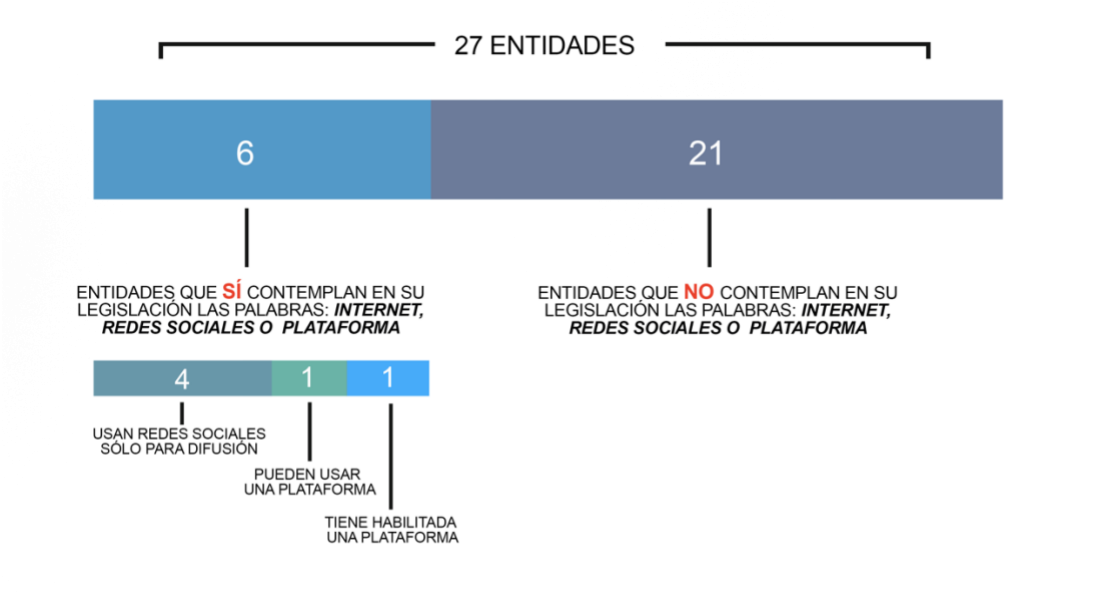
Por lo tanto, es necesario comprender cuál es el panorama de la democracia participativa en México. A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las leyes estatales que regulan los mecanismos de participación ciudadana:

Entidades mexicanas con una ley de participación ciudadana y cantidad de mecanismos



Fuente: elaboración propia.

Entidades mexicanas con una ley de participación ciudadana que mencionan al Internet



Fuente: elaboración propia.

No basta con tener diversos mecanismos de participación ciudadana, sino que éstos deben ser implementados de manera efectiva. Es ahí donde el Internet, a través de plataformas digitales para ejercer la participación ciudadana y las redes sociales pueden cambiar el juego. Y, según Aguirre (2021), la tarea de las tecnologías digitales a futuro estriba en desarrollar también la inteligencia artificial para instrumentar el mayor número posible de mecanismos de participación ciudadana, ampliar su alcance demográfico para abatir las brechas, complementar los procedimientos de mediación y promover la deliberación incluyente.

La Ciudad de México es la única que de manera obligatoria contemplan la “participación digital” en su legislación en materia de democracia participativa, tomando en cuenta que estamos casi a 40 años de la invención del Internet.

En la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019) se establece que la participación digital es *el ejercicio de los derechos ciudadanos de participación a través de canales que utilizan medios electrónicos y de tecnologías de la información y comunicaciones como medios de acceso, verificación, identificación, autenticación, validación y/o seguimiento.*

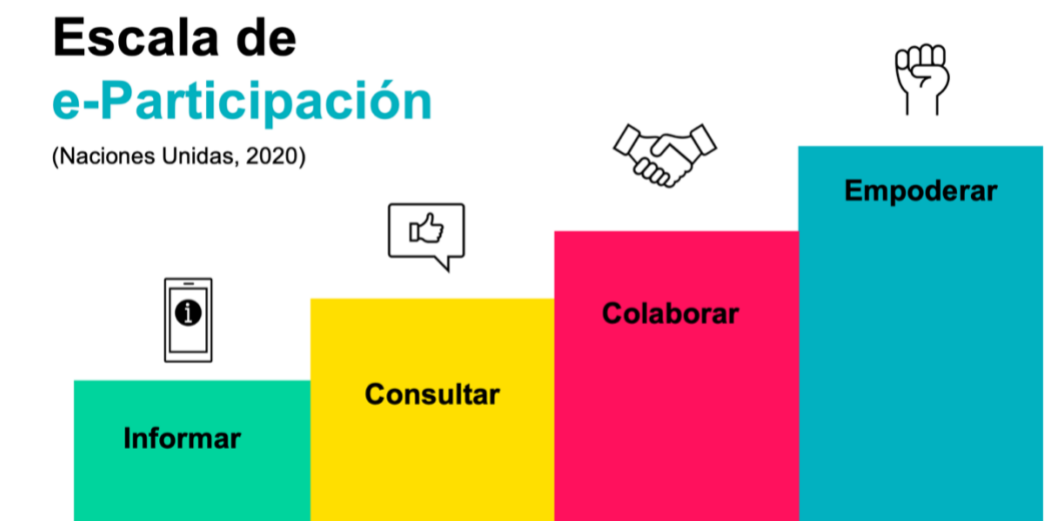
Además, la ley respectiva del estado de Jalisco considera que en el desarrollo e implementación de los mecanismos de participación ciudadana pueden utilizarse medios digitales, siempre y cuando resulte viable y así lo determinen el organismo estatal u organismos municipales de participación ciudadanas del poder ejecutivo.

En contraste, en otros estados, como Colima, Morelos, Nuevo León y Quintana Roo, el uso de los términos “sitios de internet”, “pagina web” o “redes sociales” solo son empleados de forma limitativa como medios de difusión para la publicación información relacionada con la realización de obras y servicios de los gobiernos estatales y municipales, o las actividades realizadas dentro de los mecanismos, pero no como un medio para el ejercicio de la democracia participativa.

México, en las primeras etapas de e-participación

La mayoría de las leyes de democracia participativa en México no establecen una participación digital avanzada, pues contemplan al internet meramente como un difusor de información y, en algunos casos, de consulta. Justamente la *Escala de E-participación de las Naciones Unidas* (2020) considera estas acciones apenas la primera y segunda etapa de participación digital, la de “informar” y “consultar”.

La escala de participación electrónica que propone la Organización de las Naciones Unidas propone cuatro niveles: 1. Suministro de información; 2. Consulta; 3 Colaboración; y 4. Empoderamiento (Le Blanc, 2020).



Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2020)

La legislación mexicana debe evolucionar para hacer obligatorio, además de informar y permitir la consulta, la toma de decisiones y el establecimiento de agenda por parte de la ciudadanía. La primera se hace referencia a un papel menos activo de la ciudadanía, como en las consultas públicas, y en la segunda, la ciudadanía tiene la posibilidad de influir en la agenda política de instituciones públicas, por ejemplo, haciendo peticiones electrónicas.

Atendiendo a la construcción anterior, en 2020 México ocupó el lugar 41 de 193 países en el “*Índice de desarrollo de gobierno electrónico*” teniendo una puntuación igual a 0,73. Por lo que el uso del internet en México para *ciudadanizar* la gobernanza y las prácticas democráticas no cumple con las expectativas para un país de nuestras características. La poca inversión en el desarrollo de las plataformas y la escasa publicidad para alcanzar los resultados esperados son factores seriamente ignorados.

Esto es especialmente preocupante porque la participación en línea puede aumentar la participación fuera del internet, como lo demostró un estudio entre la ciudadanía estadounidense. Incluso encontraron que la relación es más fuerte entre los menos ricos, contradiciendo los argumentos vinculados a la brecha digital. Estos resultados sugieren que la participación electrónica puede desempeñar un papel importante en la movilización de un espectro más amplio de la ciudadanía para que se involucren en los asuntos públicos (Tai, 2020: 278-296).

Es momento de que, a través del Internet, las tecnologías de la información y las plataformas digitales, se motive una nueva forma de democracia directa, y permitirle a la población manifestarse, expresarse, generar movilizaciones e involucrarse en los temas públicos en todo momento. Sin embargo, el estatus quo mexicano no parece priorizar la búsqueda de un aumento de la e-participación.

No obstante, existen en nuestro país algunos esfuerzos gubernamentales que se han sumado a la iniciativa global, con plataformas innovadoras, que poco a poco han ido integrando los cuatro niveles de participación antes mencionados. Sin embargo, al no estar contemplados por las leyes totales, no existe obligatoriedad para hacerlos vinculantes.

Conclusión: cómo aumentar la e-participación

Un amplio estudio trato de descifrar por qué algunos ciudadanos participan en la participación electrónica, mientras que otros no. Esta investigación encontró que los ciudadanos con un capital social más fuerte (un compromiso con la comunidad, propiedad de la comunidad y confianza en

el gobierno) tienen más probabilidades de participar en la participación electrónica. Cabe mencionar que los resultados no le dieron valor significativo a la utilidad percibida de los mecanismos, la facilidad de uso percibida y la actitud hacia la participación electrónica.

Por otro lado, si se utiliza la deliberación como metodología en un mecanismo de participación para resolver problemas públicos, se pueden generar muchos beneficios directos e indirectos que se traducen en un mayor interés y participación de la ciudadanía. Las personas se involucran, se empoderan y ejercen su voluntad sobre las decisiones. Aunque no toda la ciudadanía cuenta con las mismas habilidades y condiciones para deliberar. Nuevamente, las brechas por motivos sociales o políticos nos alertan de tomar los resultados de procesos deliberativos con cuidado. El uso de las tecnologías de información se ha integrado a casi todos los procesos de la sociedad y recientemente han cobrado fuerza en los procesos públicos (Garza, 2020: 21).

La ciudadanía de hoy es más partícipe, explica Sebastian Grundberger, con ganas de colaborar en la formulación y diseño de propuestas y proyectos, en conjunto con las autoridades. Esta evolución es fundamental y está permitiendo el camino a una era que podemos conceptualizar la “ciudadanía digital”, en donde existe un empoderamiento de parte de los individuos y que es un elemento clave para hablar sobre calidad democrática.

No puede ignorarse la clásica contraargumentación de Joseph Alois *"El elector común no tiene capacidad para discernir sobre los temas públicos de manera autónoma y racional y tampoco puede obtener soluciones claras para los problemas"* (Schumpeter, 1976: 262). Sin embargo, es preciso identificar la diferencia entre la democracia participativa y la representativa, que se basa prácticamente en la misma diferencia que hay entre la democracia denominada de consulta simple, o también entendido como plebiscito, y la democracia deliberativa en donde, hasta los menos “capaces” como denomina Schumpeter, pueden y deben de ser auxiliados, educados e informados por quienes son expertos antes de tomar una decisión.

No debemos olvidarnos, por dar un ejemplo, que la gran capacidad técnica de los políticos profesionales para tomar decisiones de Estado no garantiza la mejor condición moral de sus disposiciones (Ruvalcaba, 2012).

Por otro lado, retomando la conceptualización de la ciudadanía digital desde la perspectiva del empoderamiento, debemos subrayar que este nace por la facultad que tiene el individuo de no únicamente observar la realidad, pues la ciudadanía 2.0 esta en constante recepción de información, participa, controla, fiscaliza y agita masas.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas determina que la sostenibilidad de las ciudades depende en gran medida de la participación ciudadana y su evolución paralela con el uso del internet. Igualmente localiza la atención en el propósito de disminuir la brecha digital y proporcionar mayores herramientas de inclusión a grupos generacionales y territoriales que hoy no se encuentran con la capacidad de experimentar eficazmente una participación ciudadana a través del internet.

Por último, no se puede concebir una mayor participación digital sin presupuestos y estrategias publicitarias en el entorno en donde se desarrolla. Los institutos electorales y algunos gobiernos han tratado de impulsar la e-participación con publicaciones en periódicos, spots en radio y televisión y ruedas de prensa. Si no involucran en sus equipos de trabajo a personas expertas y creativas de marketing digital y automatizado, analistas de anuncios de Facebook y Google Ads, y desarrolladores, nunca podrán competir contra empresas y grandes marcas por la atención del público que pudiera estar interesado en mecanismos de participación por Internet.

“En los medios digitales no solo logran que cada receptor pueda convertirse en un emisor, sino que los receptores son protagonistas al propagar en tiempo real la información y deliberación oportuna. Ello implica dos beneficios: los interlocutores son la instancia real de la verdadera censura y el registro de los mensajes y sus contenidos multiplica los enlaces dentro de la red. Esto da más autenticidad a la comunicación en los medios digitales porque los mensajes buscan el sentido de mejorar al contenido, al medio y al usuario independientemente del impacto que genere en los grupos de poder.” (Aguirre, 2012).

Este autor incluso argumenta que en el peor de los escenarios el uso del internet en la participación quizá no este sujeto a elevar las estadísticas de la audiencia; pero la digitalización sí aumentar la

calidad de la participación. Se promueve, por argumentos más cualitativos que cuantitativos, los derechos mediáticos, la educación hacia lo digital y el gobierno electrónico.

Por lo tanto, generando una amalgama entre los argumentos presentados anteriormente, las premisas sustancialmente importantes que motivan una mayor participación son las siguientes:



Fuente: elaboración propia.

Dependiendo de la retroalimentación que generen las plataformas en línea para la democracia participativa y sus espacios deliberativos, como la información sobre su uso e interacción, la experiencia podrá ser sustancialmente mejorada. Las características de la plataforma y el entendimiento del entorno digital y en línea por las instituciones públicas son factores que pueden motivar una mayor participación de la ciudadanía.

Bibliografía

Camacho, Kemly. La brecha digital. Palabras en juego: enfoques multiculturales sobre las sociedades de la información, 2005, p. 61-71.

Cabero, Almenara, Julio, et al. Las Tecnologías de la Información y Comunicación para la inclusión: reformulando la brecha digital. 2017.

Martínez Domínguez, M. (2020). La desigualdad digital en México: un análisis de las razones para el no acceso y el no uso de internet. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, p.10-19).

Guillermo Alemán, “La brecha digital y su impacto en México”, 2019, p. 22-23.

Alcides, Cuartas, Tarazona (2017). "La brecha digital en Colombia: Un análisis de las políticas gubernamentales para su disminución." Redes de Ingeniería: 59-71.

Tai, K.T., Porumbescu, G. and Shon, J., 2020. Can e-participation stimulate offline citizen participation: an empirical test with practical implications. Public Management Review, 22(2), pp.278-296.

Choi, J.C. and Song, C., 2020. Factors explaining why some citizens engage in E-participation, while others do not. Government Information Quarterly, 37(4), p.101524.

McLaverty, P., 2017. Is public participation a good thing? In Public participation and innovations in community governance (pp. 185-197). Routledge.

Ayala López, J. F., 2017. Historia política de México a través de sus instituciones y reformas electorales, siglo XX: una propuesta de análisis.

Aguirre Sala, J. F. (2021) «Los desafíos de la transformación digital de la democracia», RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi. doi: 10.6035/recerca.4660.

Viesca, K. V., Márquez, E. G., & Sánchez, F. D. M. G. (2013). Presupuesto público sin participación ciudadana. La necesidad de un cambio institucional en México para la consolidación democrática. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, (pp. 105-127)

IMCO 2016. Estudio comparado de la legislación en materia de mecanismos de participación ciudadana. <https://imco.org.mx/legislacion-en-materia-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana/>

Alva de la Selva, A. R. (2020). Escenarios y desafíos de la ciudadanía digital en México. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, (pp. 81-105).

Sierra Caballero, F. (2021). Ciudadanía Digital y Democracia 4.0. Un programa De investigación. *Democracia inconclusa: Movimientos sociales, esfera pública y redes digitales*. (pp. 23-62).

Informe Latinobarómetro 2018,
http://www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf, (pp. 29).

Ruvalcaba, Edgar. 2019 “Citizen Participation and Open Government: comparing perceptions between Organized Civil Society and Government in the State of Jalisco, Mexico”

Ford, Elaine. 2019 “El reto de la democracia digital, hacia una ciudadanía interconectarla” Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa.” Universidad de Guadalajara, México.

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.4 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [12 de agosto del 2021].

Garza, Carlos. 2020 “Los efectos del uso de la tecnología y el rediseño de procesos de deliberación pública en la participación ciudadana: estudio de caso del presupuesto en San Pedro Garza García en 2019” Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey.

[Anon.] 2013. 4. “Schumpeter’s Elite Conception of Democracy as Method”. Joseph Schumpeter's Two Theories of Democracy. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, pp. 99-139.

Dahlgren, Peter. 2012 “Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle”, *European Journal of Communication*, 27(3), pp. 318–320.

Le Blanc, D. (2020) E-participation: a quick overview of recent qualitative trends (pp. 5-6).